



# 439

OCTUBRE  
2016

## DE CALAIS A PARÍS

**Blanca Garcés Mascareñas**, investigadora sénior CIDOB

**L**os campos de refugiados de Calais y París no pretenden parecerse en nada. La llamada “jungla” de Calais era un inmenso poblado de chabolas donde, en agosto de 2016, malvivían unas 10.000 personas (entre ellas, 1.000 menores) con la esperanza de poder entrar un día en Gran Bretaña. Tras dismantelar la mitad del campo en febrero de 2016, las autoridades francesas instalaron un centro de acogida temporal, cerrado con vallas, scanners y puertas metálicas y cuyo principal peaje para entrar era ceder las huellas dactilares y, con ello, renunciar al sueño de seguir el viaje. Además, en agosto de 2016, los gobiernos británico y francés empezaron la construcción de un muro, conocido como la Gran Muralla de Calais, para bloquear definitivamente el paso hacia Gran Bretaña.

Por su lado, el campo de refugiados de París es una promesa y un proyecto en desarrollo. En mayo de 2016 Anne Hidalgo, alcaldesa de París, anunció la creación de un campo humanitario para acabar con los campamentos improvisados en las calles de la capital francesa. No queremos más “campamentos de la vergüenza”, dijo. Y siguió: ante una Europa y un estado francés que “no están a la altura de la historia”, París quiere dar cobijo a los refugiados e inmigrantes y paliar así la saturación del sistema estatal. Inspirado en el campo de Grande-Synthe en Dunkerque, el campo de París cumplirá con los estándares humanitarios internacionales y, a diferencia del centro de acogida de Calais, no habrá que dejar las huellas dactilares para poder entrar. Se trata de darles cobijo, no de ponerlos bajo control.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, Calais y París forman parte de una misma historia. Es una historia de tensión y a la vez de dependencia mutua entre Estado y ciudad. La tensión es clara: mientras que el Estado está ocupado en fortificar sus fronteras y excluir a aquellos que osen traspasarlas sin su consentimiento, la ciudad está preocupada por luchar contra la exclusión social, también cuando ésta resulta de los efectos excluyentes o la ineficiencia de las políticas estatales. Al igual que Barcelona, París se ha proclamado ciudad refugio. Sería fácil explicarlo por cuestiones ideológicas: Anne Hidalgo es un referente del municipalismo socialista francés y ella misma es nieta de refugiados españoles. Sin embargo, hay algo más fundamental: sea del color político que sea, ninguna ciudad puede permitirse tener gente durmiendo en la calle, sin poner en riesgo cuestiones tan fundamentales como la salud pública o la cohesión social.

En septiembre de 2016 el ministro del Interior Bernard Cazeneuve anunciaba el dismantelamiento definitivo de la “jungla” de Calais mientras que el Ayunta-

miento ponía fecha a la apertura del campo de París. Para el Estado, el campo de París permite reorientar a los recién llegados hacia los centros de acogida de las provincias antes de que lleguen a Calais. Es decir, podría reducir el número de llegadas. Para el Ayuntamiento, es fundamental que el Estado derive regularmente a los solicitantes de asilo del campo de París a los centros de acogida de las provincias. Si hay 80 llegadas diarias a París, otros tantos deberían ser trasladados hacia las provincias. De lo contrario, las 400 (o 600) plazas del campo de París quedarán rápidamente colapsadas.

Esto último, tan fundamental para el funcionamiento del campo de París, tiene dos grandes limitaciones. Primero, los llamados “dublinese”, aquellos que dejaron sus huellas digitales en otro país de la Unión Europea y por lo tanto deberían hacer su solicitud de asilo desde ahí, no van a ser derivados a los centros de las provincias. Esto quiere decir que, tras las cinco noches en el campo de París, volverán a la calle. Se estima que representan el 20 o 30% de los solicitantes de asilo en la capital francesa. De nuevo, reaparece pues la tensión Estado-ciudad: mientras que el Estado francés no les reconoce como solicitantes de asilo “propios”, el Ayuntamiento no tiene otra alternativa que reconocerlos como ciudadanos de facto y darles cobijo más allá de las noches prometidas en el campo de París. O eso, o volverán “los campamentos de la vergüenza” en las calles de la ciudad.

Segundo, para garantizar lo que llaman la “fluidez” del sistema, es necesario ampliar considerablemente el número de plazas de acogida en toda Francia. En vistas al desmantelamiento de la “jungla” de Calais, el Estado prometió crear 8.000 nuevas plazas. Sólo el anuncio generó la oposición de numerosos alcaldes de centro y extrema derecha. No quieren, dicen, la “proliferación de multitud de pequeños Calais sobre el conjunto del territorio nacional”. Simplemente, no quieren refugiados en sus municipios. Esto explica que a finales de octubre de 2016 el gobierno francés empezara el desmantelamiento de Calais sin disponer de las plazas de acogida necesarias para derivarlos a las provincias. Un ejemplo más de la dependencia entre los distintos niveles administrativos. La consecuencia es clara: sin suficientes plazas, no hay desmantelamiento de Calais ni campo de París que valgan. Otros Calais y otros “campamentos de la vergüenza” verán la luz en breve. Y así seguiremos, efectivamente, “no estando a la altura de la historia”.